Carla Antón Farías, presa política en Ramo Verde, requiere atención médica urgente

Yanmarys Antón exigió este jueves atención médica urgente y especializada para su hermana, la presa política Carla Antón Farías, quien forma parte de las dos mujeres en huelga de hambre en la cárcel de Ramo Verde, ubicada en Los Teques, estado Miranda.

Carla presenta una molestia en el seno izquierdo que no ha sido evaluada ni tratada, una situación que pone en riesgo su vida.

El Comité por la libertad de los presos políticos (Clippve) recordó en redes sociales que “las presas políticas no solo sufren violencia institucional: también enfrentan violencia diferenciada de género al no recibir atención ginecológica ni especializada, lo que pone en mayor riesgo sus vidas”.

El pasado lunes 9 de noviembre varios presos políticos militares iniciaron una huelga de hambre para exigir su libertad y ser considerados en las conversaciones sobre la liberación de las personas detenidas por motivos políticos, pues afirman que suelen ser relegados. Poco después se unieron dos mujeres de la causa “Gobernación de Monagas”: Carla Antón y Yusimar Montilla.

Desde el inicio de la huelga han sido tratados con hostilidad. Les negaron el acceso a las instalaciones del centro penitenciario, lo que dificultaba que hicieran sus necesidades y se hidrataran. Después les suspendieron las visitas como forma de castigo. Sus familiares afirman que han llevado diferentes tipos de insumos y que no saben si realmente llegan a manos de los huelguistas. A esto se suma que siete de ellos abandonaron la huelga debido a la compensación y a la falta de atención médica.

El próximo viernes 27 de noviembre los familiares se reunirán afuera de la sede principal del Ministerio Público (MP) en Parque Carabobo, al centro de Caracas, para exigirle a este ente que no solo investigue, sino que intervenga y vele por los derechos fundamentales de estos presos políticos, cuya responsabilidad recae en el Estado.

El Clippve exigió atención médica urgente y especializada,

incluida atención ginecológica; que sus familiares puedan visitarlos y corroborar su estado de salud; acceso garantizado a agua, alimentos y medicinas, con transparencia sobre el destino de los insumos; que el MP intervenga de oficio y se ponga fin a los castigos y represalias.

“La vida de Carla Antón y de los demás huelguistas corre peligro: responsabilizamos al Estado venezolano de cualquier daño irreparable a su salud o integridad”, señaló el Clippve.

La Patilla